

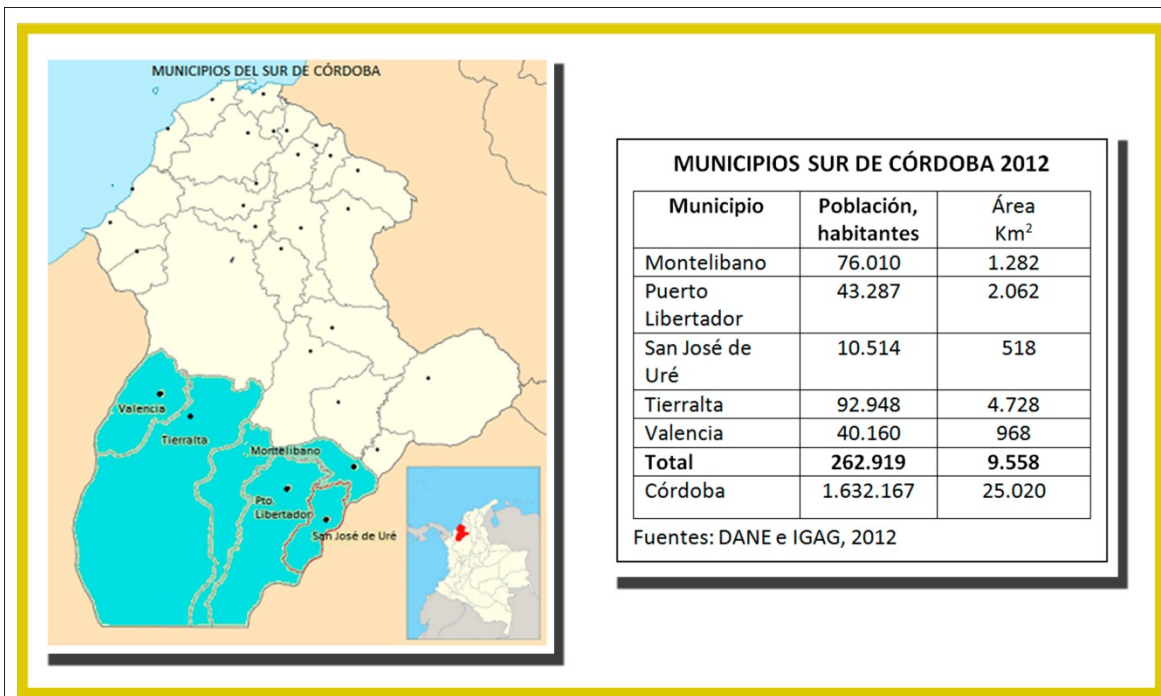
# El sur de Córdoba: a la espera del plan que acabe con el conflicto, la pobreza y el deterioro ambiental

Víctor Negrete Barrera

Centro de Estudios Sociales y Políticos- Universidad del Sinú

## Presentación

El sur del departamento de Córdoba está formado por cinco municipios: Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré. Su cobertura territorial es apreciable puesto que representa el 38.2% del total mientras su población apenas alcanza el 16.1%, de acuerdo con el mapa y cuadro siguientes:



En este territorio se encuentran comunidades indígenas (Zenú y Emberas) y negras (en San José de Uré, especialmente); la mayor parte del Parque nacional natural Paramillo (el 72% de las 492.225 hectáreas que lo componen); la hidroeléctrica de Urrá I con 340 megavatios de potencia instalada; montarán próximamente, tomando como base Cerro Matoso, el nodo eléctrico que unirá el Caribe con el interior del país y permitirá evacuar energía a Centro América; recursos naturales como ferroníquel, carbón, oro, cobre y riqueza hídrica (ríos Sinú, San Jorge, San Pedro, Verde, Esmeralda, Manso y Uré); el 70% de la reforestación con especies introducidas (teca, acacia, melina y eucalipto); 5.000 hectáreas iniciales de caucho y cacao con algunas dificultades por su tardío rendimiento y falta de apoyo, 3.000 hectáreas de papaya con problemas por las vías en mal estado y plagas, cultivos de maíz y ñame disminuidos y los de arroz y maíz sostenidos con gran esfuerzo, la ganadería tradicional con mucha tierra y

poco empleo. En general la gente vive de la siembra y recolección de hojas de coca, la explotación minera artesanal y lo que pagan los que explotan legal e ilegalmente el oro con maquinaria pesada, los oficios y negocios que está generando la explotación de carbón y oro y la construcción de la carboeléctrica, el pancoger en pequeñas parcelas y los jornales esporádicos.

La violencia ha sido ininterrumpida: en 1949 comenzó la época de la Violencia bipartidista con guerrillas liberales que se opusieron al despojo de tierras y la acción del Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge que conformó Colonias campesinas, algunas de las cuales llegaron a ser corregimientos; en 1960 grupos de terratenientes y comerciantes locales y foráneos empezaron el despojo de tierra valiéndose de sicarios traídos del interior del país, engaños y trampas judiciales; en 1967 surgió la primera guerrilla de izquierda, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y así, cronológicamente, aparecieron las FARC en límites con el departamento de Antioquia en 1981, el narcotráfico en 1984, los primeros cultivos de coca en 1992, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1994, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en 1996, el proceso de negociación Gobierno-AUC en Santafé Ralito entre el 2003-2006 y desde entonces las acciones de grupos no desmovilizados, reincidentes y los surgidos con la desmovilización, las llamadas bandas criminales con alta capacidad de reclutamiento forzado, voluntario o con engaños, camuflaje con las comunidades e incidencia en los gobiernos locales, autoridades y organismos de justicia.

### **Del Centro de coordinación de atención integral...**

Debido al viejo y permanente conflicto que ha padecido la zona, en el 2004 fue incluida en el área de operación de los Centros de Coordinación de Atención Integral (CCAI). En su momento el gobierno la presentó como estrategia para “la recuperación y control militar del territorio, la lucha contra las drogas y el crimen organizado, la reactivación social y económica, el fortalecimiento del servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana”. En Córdoba, los sitios escogidos para implementar estas acciones fueron la llamada Zona de Ubicación en Tierralta; Tierradentro en Montelíbano; Mielles, San Rafael, Cocuelo, Guadal y Santo Domingo en Valencia; Río Verde, Juan José y La Rica en Puerto Libertador. De esta intervención no contamos con ninguna información oficial.

“Durante el período 2004-2011, la inversión estuvo centrada en la erradicación de cultivos de uso ilícito, proyectos productivos, atención de desplazados, más cobertura en educación y atención alimentaria escolar, construcción de puentes menores, capacitación, titulación de predios, fortalecimiento militar y apoyo judicial con un costo de 117.380 millones de pesos, el 90% costado por el gobierno nacional y el resto por el departamento y los municipios”, según declaraciones de sus funcionarios e informes del Plan. Falta conocer cuáles fueron los impactos

reales que produjo esta inversión, es decir, cuál fue el mejoramiento obtenido por parte de la población.

De acuerdo con los funcionarios consultados la experiencia les permitió conocer la zona, hacer inversiones, acordar planes de acción y coordinación con instancias municipales, promocionar el programa y conformar mesas de trabajo sobre las principales necesidades. Reconocen que faltó voluntad política de la Gobernación y la existencia de politiquería y corrupción en las administraciones municipales. La infraestructura terciaria es escasa y en malas condiciones, la concentración de la tierra es alta y falta claridad sobre su tenencia y uso. Al final aseguraron que a pesar de las dificultades algunos territorios estaban en proceso de recuperación y transición. No faltan los analistas que llaman la atención sobre la falta de interés, compromiso y capacidad de gestión de las alcaldías, la carencia de información y visión integral de las oficinas de planeación y el marcado desinterés de los Concejos y Personerías por estos temas.

La mayoría de los líderes y representantes de organizaciones sociales tienen claro que lo hecho por el gobierno nacional hasta el año pasado es importante pero lo consideran insuficiente. Las inversiones en áreas tan sensibles como vivienda, educación, salud, producción y vías dejan mucho que desear; el desplazamiento, confinamiento y reclutamiento no desaparecen y los grupos armados ilegales siguen presentes. Además, agregan, faltó participación y control en la adopción y ejecución de acciones y obras, así como en su evaluación y seguimiento; hay desconfianza mutua entre la fuerza pública y la población, hubo poca coordinación interinstitucional, la justicia adolece de muchas fallas, las reuniones de la población eran vigiladas, las instancias gubernamentales son débiles, lentas y despreocupadas.

### **...Al Plan Nacional de consolidación**

Cuatro años después el gobierno aprobó el Plan Nacional de Consolidación y en el 2011 entró a operar la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación y Reconstrucción Territorial. Una de las oficinas funciona en Montería, la Gerencia regional Nudo de Paramillo, que atiende los cinco municipios del sur de Córdoba incluidos en el Plan (Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré) y diez de Antioquia (Ituango, Valdivia, Briceño, Anorí, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y Cauca).

Las Zonas de consolidación las caracterizan por tener “débil presencia institucional, alta vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, presencia de cultivos ilícitos, centros de acción del terrorismo, narcotráfico y sus interconexiones y dependencia de la población frente a economías ilícitas”. En reunión efectuada el pasado 23 de abril la Gerencia en Montería precisó los componentes, el plan de acción y los retos. En los componentes aparecen la institucionalización del territorio, la participación ciudadana y buen gobierno y la integración regional. El Plan de acción está

basado en el fortalecimiento de la fuerza pública, erradicación de cultivos de uso ilícito, formalización de la explotación minera artesanal, tenencia de la tierra y ordenamiento territorial, presencia y operatividad de la justicia formal y no formal, reparación y reconciliación, reforzar la gobernabilidad, organización y participación ciudadana, productividad, infraestructura y conectividad. Dentro de los retos figuran la recuperación del Parque natural nacional Paramillo, asegurar áreas libres de cultivos de uso ilícito y la sustracción de áreas de la reserva del Pacífico, entre otros.

De acuerdo con la información suministrada el Plan atenderá 532 veredas de los 15 municipios priorizados. Mediante el empleo de semaforización en el tema de seguridad, encontraron que el 42.8% de ellas están en rojo (alto riesgo en orden público, cultivos ilícitos y movilidad), el 56.6% en amarillo (con presencia de fuerza pública, poca incidencia de grupos armados ilegales y cierta movilidad por parte de los habitantes) y el 0.6% en verde (con presencia de fuerza pública y ausencia de grupos armados ilegales). Para el caso de los municipios del sur ninguno está en verde: Tierralta tiene 31 en rojo y 35 en amarillo; Puerto Libertador 30 en rojo y 8 en amarillo; Montelíbano 9 en rojo y 4 en amarillo; San José de Uré 3 en rojo y 32 en amarillo y Valencia 29 en amarillo.

Muchos están de acuerdo que los desafíos son grandes y ambiciosos los propósitos del Plan. Hasta ahora cuentan con recursos gestionados por valor de 42.682 millones de pesos. ¿Qué tiempo demandará la ejecución de estos programas con el nuevo enfoque si el proceso lleva ya 8 años y lo logrado no es tan satisfactorio?, ¿qué aspectos, criterios y metodologías están empleando ahora que ya no es una instancia de coordinación intergerencial como el CCAI sino una política de Estado que permite mejores resultados?

## **Algunos aspectos de la vieja y cruda realidad**

### **La tierra**

El himno del municipio de Montelíbano dice que Dios engendró la riqueza en su suelo para colmar a sus pobladores de dicha y valor. Sin embargo la historia cuenta que no ha sido así para la inmensa mayoría de su gente. A pesar de lo aislada y retirada de la zona, antes de 1740 las autoridades españolas habían concedido un inmenso globo de tierras, calculado en más de 150 mil hectáreas, llamado **terrenos de Uré**, al capitán Alonso Gil por sus servicios prestados, con la obligación de explotar las minas de oro del lugar. No tuvieron en cuenta las posesiones de los negros y algunos reductos indígenas. Con el tiempo, ante la imposibilidad de administrar y controlar semejante territorio, la insubordinación de los negros esclavos y la llegada de tandas de colonos de diferentes lugares, los sucesivos “propietarios” fueron cediendo hasta que en 1960 el dominio sobre la tierra llegó a su fin, cuando el mismo gobierno principió a conceder títulos de baldíos. Esto explica que en 1949 existieran en el área 254 fincas entre 0 y 99 hectáreas, 123 entre 100 y 199, 40 entre 200 y 299, 22 entre 300 y 399, 12 entre

400 y 499 y 16 entre 500 y más hectáreas, una de estas últimas medía 4.135 hectáreas, según el censo de ocupantes ordenado por la Oficina de Catastro de Bolívar. Lo que nos demuestra que la concentración de la tierra viene de vieja data.

Para la misma época autoridades antioqueñas clausuraron la colonia penal de Antadó en el municipio de Ituango, en límites con Montelibano. Los presidiarios, ya libres, fueron alentados a colonizar las partes altas de los ríos Sinú y San Jorge. Al tiempo y en otro lugar un grupo de campesinos se organizaron en el Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge con el propósito de ocupar baldíos, proteger tierras ocupadas y recuperar las usurpadas por hacendados y comerciantes. Fueron los años de la violencia entre los partidos liberal y conservador con el surgimiento de las guerrillas liberales de Julio Guerra en Montelíbano y Puerto Libertador y la de Mariano Sandón en Tierralta. En 1967 irrumpió el Ejército Popular de Liberación EPL, lo que ocasionó que el alto Sinú y San Jorge fueran declaradas zonas de guerra.

Semejante situación afectó el proceso económico, político y social de toda la zona. La posesión y concentración de la tierra fue el objetivo principal de comerciantes, políticos y hacendados. A medida que lo consiguieron ampliaron la ganadería extensiva y por consiguiente, directa o indirectamente, redujeron el comercio del arroz y maíz, disminuyeron los cultivos temporales por la pérdida de unidades de explotación en arrendamiento, aparcería y colonato y propiciaron la emigración de población rural, según lo demuestran los censos agropecuarios de Montelibano de 1960 y 1970-71.

En el período 1963-2003, tiempo de funcionamiento del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA en Córdoba, tituló en los cinco municipios 178.517,5 hectáreas de baldíos a 4.346 familias y adjudicó 79 predios de 36.223,2 hectáreas a 2.167 familias. Actualmente la tenencia de la tierra por rangos de superficie está distribuida de la siguiente manera según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi:

Municipios	Predios (Hectáreas)			Propietarios			Superficie (Hectáreas)		
	-1 a 10	10 a 200	200 a más de 2000	-1 a 10	10 a 200	200 a más de 2000	-1 a 10	10 a 200	200 a más de 2000
Montelibano	1.126	1.457	89	1.302	1.814	133	2.026	58.142	38.601
Pto. Libertador	1.924	1.595	65	1.990	2.002	103	2.810	70.153	24.479
Tierralta	4.476	2.068	100	3.350	2.467	128	10.096	96.053	151.857
Valencia	1.684	1.070	66	1.869	1.434	145	6.049	40.483	34.500
San José de Uré	482	407	39	609	496	125	1.088	15.408	13.321
	9.692	6.597	359	9.120	8.213	634	22.069	280.239	262.758
<b>Total municipios</b>	16.648*			17.967*			565.036		
<b>Córdoba</b>	124.544*			152.100*			2.082.887		

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAG, 2012.\*No incluye mejoras ni condominios

### Tenencia de tierra por rangos de superficie en municipios del sur

En resumen la situación es la siguiente: a) 9.120 pequeños propietarios poseen 22.069 hectáreas, el 3.9% de la tierra total; b) 8.213 medianos propietarios tienen

280.239 hectáreas, el 49.5% del total; c) 634 grandes propietarios cuentan con 262.758 hectáreas, el 46.5% del total. Es decir, hay concentración de la tierra, puesto que el 3.5% de los propietarios son dueños de casi la mitad de la tierra. También llama la atención el alto porcentaje que está en manos de los medianos propietarios. Entre estos hay muchos vulnerables que, sin ningún apoyo, claudican ante las amenazas de unos y ofrecimientos de otros. En el otro extremo, los que cuentan con posibilidades para mantenerse en la zona y adquirir nuevos predios por medios legales e ilegales.

La zona ha pasado por las siguientes etapas: 1. Colonización y asentamientos. 2. Agricultura de subsistencia y minería artesanal. 3. Ganadería extensiva y agricultura de pancoger y comercial. 4. Cultivos de uso ilícito. 5. Gran minería (ferróniquel, carbón y oro). En la actualidad es la que predomina, al lado de la ganadería extensiva, cultivos forestales, agroindustriales, agrícolas y de uso ilícito. En cada una de estas etapas la tenencia y uso de la tierra ha experimentado cambios, especialmente en esta de la gran minería. La actividad económica más afectada, sin duda alguna, ha sido la agricultura, tanto la de pancoger como la comercial: la ganadería le arrebató espacio, mientras la coca y minería les quitaron espacio y mano de obra.

Estos hechos suscitan reflexiones. Tomemos por ejemplo el caso del INCORA que entregó 214.740 hectáreas entre adjudicaciones y titulación de baldíos. Según funcionarios del desaparecido INCORA y ahora del INCODER, el instituto que lo reemplazó, más del 60% de esas tierras no pertenecen a los beneficiarios iniciales. Las razones expuestas son variadas: ventas forzadas o voluntarias, amenazas, extorsión, desplazamiento, homicidios, reclutamiento, desapariciones, abandono o despojo. Y si nos vamos más atrás, la violencia fue el medio más utilizado para hacerse a los predios. Con total impunidad impusieron las leyes del silencio y el más fuerte, debido al aislamiento en que se mantuvo la zona, la colonización, el poblamiento tardío, la inseguridad permanente por parte de grupos armados ilegales de distintas concepciones e intereses, en síntesis, la ausencia casi total del Estado. Por esta y otras razones preguntamos: ¿qué área de tierra está protegida en la zona?, ¿hasta qué punto son efectivas estas medidas?

De seguir el auge minero-energético-forestal, el avance de los cultivos agroindustriales, persistan los sembrados de coca y sigan presentes los grupos armados ilegales, es previsible que aumente el área de los medianos y grandes propietarios a costa del área de los pequeños y los más vulnerables de los medianos. Los primeros tratarán de asegurar la posesión, ampliarla si es posible y valorizarla. ¿Qué medidas están tomando para proteger las propiedades de los pequeños propietarios y los más indefensos de los medianos? Sobre todo ahora cuando se afirma que la restitución de tierras comenzará por los municipios que atiende el Plan Nacional de Consolidación. Hasta el 13 de abril pasado en Córdoba habían inscrito 569 solicitudes de restitución de tierras y Tierralta aparece como uno de los municipios más despojados y abandonados con 4.425 hectáreas, según la Unidad de Restitución de Tierras.

## Los homicidios y la inseguridad

En el período 2006-2011 hubo en la zona 876 homicidios: 319 en Montelíbano, 272 en Tierralta, 207 en Puerto Libertador, 58 en Valencia y 20 en el nuevo municipio de San José de Uré, segregado de Montelibano. Esta cifra representó el 31.2% de los homicidios en Córdoba. Los años críticos fueron el 2011, el año pasado, con 207 homicidios y 2008 con 190. La inseguridad en general preocupa a la población por el empleo de granadas en los atentados, las minas antipersonales, así como el incremento de casos de lesiones comunes, extorsión, amenazas, hurto a personas, residencias y comercio, venta y consumo de drogas y prostitución. La falta de datos confiables en la mayoría de los casos es una falla que debe corregirse rápidamente. El siguiente cuadro nos ilustra sobre el número de homicidios sucedidos en la zona.

HOMICIDIOS MUNICIPIOS SUR CÓRDOBA							
MUNICIPIOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total municipios
Montelibano	40	38	56	33	67	85	319
Pto. Libertador	13	44	49	16	40	45	207
Tierralta	46	60	51	20	31	64	272
Valencia	4	6	32	4	7	5	58
San José de Uré	*	*	4	6	2	8	20
Total por años	103	148	192	79	147	207	876
<b>Córdoba</b>	253	366	512	532	575	569	2807

Fuentes: Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, Montería, 2012 y Observatorio del delito Gobernación Córdoba, 2011. \*No existía como municipio

Mucha gente no entiende por qué suceden estos hechos en la zona más resguardada por la fuerza pública, puesto que allí actuó el Comando operativo especial de seguridad ciudadana del bajo Cauca antioqueño, creado por la Policía en septiembre del 2009 con unidades operativas de Córdoba y Antioquia. Del primero hicieron parte las Estaciones de Policía de Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel, Uré, La Apartada y la subestación Tierradentro. Del segundo las Estaciones de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la subestación La Caucana. La creación obedeció “a la importancia estratégica que tiene la zona para la economía del país, la confluencia de conflictos de tipo social, político y de orden público, así como el incremento de los índices delincuenciales”. Al parecer por motivos administrativos dejó de operar poco tiempo después. También han hecho presencia en la zona el CCAI, hoy Plan de Consolidación, Operación Troya con intervención de la Policía, Ejército, Armada y el DAS en un principio, Operación Medusa adelantada por el Ejército y la seguridad que protege el complejo de Cerro Matoso en Montelíbano, la hidroeléctrica de Urrá y la penitenciaría en Tierralta y la carboeléctrica en construcción de la empresa Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, Gecelca.

La Operación Medusa la adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta “Nudo de Paramillo”, integrada por 4.572 hombres del ejército en la zona comprendida entre

Montelibano y Puerto Libertador en Córdoba y Tarazá e Ituango en Antioquia. De acuerdo con los mandos “en esta zona se ubican las estructuras más fuertes del bloque noroccidental de las FARC, con mayor poder de combate y fuente de financiación...es considerada como área de retaguardia y acumulación estratégica, además de corredor de movilidad con salida al mar Caribe... los principales objetivos que persiguen son debilitar los frentes 5, 18 y 58 de las FARC y la erradicación de cultivos de uso ilícito”.

En Montelibano, el municipio más desarrollado de la zona y donde más han ocurrido homicidios en los últimos años, el Alcalde Gabriel Calle Demoya, conoce muy bien el riesgo en que se encuentra el municipio y la zona por la semaforización en seguridad que hizo la fuerza pública. Sin embargo, asegura que cuenta con un comando de Policía insuficiente, conformado por tres oficiales, seis suboficiales y 42 patrulleros, dotados con nueve carros y 13 motos, cuatro de ellas en mal estado, lo que no les permite brindar mayor seguridad. Y ¿el resto de los municipios? El aumento constante o intermitente del pie de fuerza e inteligencia como prioridad fundamental en estas zonas de conflicto no ha dado resultados. Las lecciones por las que hemos pasado nos ofrecen lecciones importantes que debemos tener en cuenta y aplicar si queremos construir el verdadero Plan que requieren los municipios del sur.

### Los desplazados por la violencia

En el periodo 2006-2011 hubo en la zona 43.609 desplazados por la violencia, el 72.6% del total en el departamento. Los años críticos fueron el 2008 con 11.759 y el 2007 con 7.740, como lo vemos en el siguiente cuadro:

Montelibano	2417	1273	1857	1340	2014	2615	11.516
Pto. Libertador	1604	1828	4731	1539	1278	1180	12.160
Tierralta	1994	3138	3864	2072	1312	2757	15.137
Valencia	621	1449	1244	576	198	158	4.246
San José de Uré	19	52	63	207	106	103	550
Total años	6655	7740	11759	5734	4908	6813	43609
<b>Córdoba</b>	8398	9633	14093	8679	8993	10257	60.053

Fuentes: Departamento para la Prosperidad Social. Unidad para Víctimas de la Violencia 2012

¿Cuál es la explicación al respecto?, ¿dónde están estas familias y cómo se encuentran?, ¿qué piensa hacer el Plan de Consolidación con ellas?, ¿qué pasó con sus tierras?, ¿si retornan cuentan con la debida seguridad y el bienestar que merecen?



## Lo minero-energético

Según observaciones, estudios preliminares y definitivos contamos con níquel, hierro, carbón, oro, hidrocarburos, calizas, arcilla, yeso, arenas cuarzosas, asbesto, cobalto, cobre, cromo, mármol y materiales para la construcción. Hace 24 años escribí en el editorial de *La Revista* número 8 de la Academia de Historia de Córdoba (marzo de 1988) que “el departamento y la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge CVS se han quedado cortos en la definición y aplicación de políticas y mecanismos de control para la explotación de nuestros minerales. Así encontramos que los estudios de impacto ambiental son escasos y no hay seguimiento de sus consecuencias, no se sabe hasta dónde va la contaminación de las aguas y las tierras por efecto de la extracción y se ignora por completo las condiciones técnicas, sociales y económicas de los pequeños mineros. Falta pues, un inventario minero, medidas de asistencia técnica y fiscalización de las explotaciones”. Esto pues no es nuevo. Viene de muchos años atrás.

Les informo o recuerdo que la explotación minera empezó en 1742, aunque existen datos de 13 minas de oro y 2 de cobre, las más importantes fueron Rá, El Penal, La Antigua o El Alacrán, todavía activa, Soledad y Uré. En cuanto el carbón, desde hace más de 120 años se sabía de la existencia de un gran yacimiento, Luis Striffler lo reseñó en su obra *El río San Jorge*. En 1943, grupos de técnicos hicieron las primeras visitas a los sitios reseñados y un año después las primeras exploraciones de superficie. Hubo negociaciones e intentos fallidos hasta 1982 cuando comenzó la explotación con la presencia de las empresas Carbones del Caribe y Carbones de Colombia S.A. En 1956 descubrieron los ricos yacimientos de níquel, hierro y otros minerales en Cerro Matoso, ocupado entonces por Villa Matoso con 500 habitantes que terminó desplazada a un basurero de la cabecera municipal. También se presentaron negociaciones y litigios hasta cuando principió la explotación en 1982.

Hoy en día Córdoba es el tercer productor de carbón en el país después de la Guajira y Cesar con reservas probadas de 378.5 millones de toneladas. La empresa Gecelca está construyendo una termoeléctrica en Puerto Libertador con capacidad de 164 megavatios que debe entrar en operación el próximo año y le fue asignada una segunda en el mismo municipio con capacidad de 250 megavatios para operar en el 2016. Empresas chinas son las encargadas de fabricar los principales equipos como caldera, turbina y generador. Cerro Matoso termina sus primeros 30 años de concesión el próximo mes de octubre. En la actualidad produce 50.000 toneladas de ferroníquel. De todos es sabido la contaminación que produce en algunas fuentes de agua y el no pago de impuestos por aprovechamiento del hierro que utiliza en la aleación con níquel. En estos momentos discute con el gobierno nacional los términos de la nueva concesión y cosa rara: ni los municipios donde se encuentra el yacimiento ni el departamento tienen ninguna representación en estas negociaciones. La explotación legal e ilegal del oro con gran maquinaria ha causado enormes daños

ambientales en la zona. Grupos y empresas nacionales y canadienses se encuentran en los territorios, aparentemente sin ningún control por parte de autoridades locales ni nacionales.

De nuevo surgen preguntas: ¿quién o quienes deben informar sobre lo que pasa con cada uno de los recursos que están siendo explotados?; existen datos sin confirmar sobre títulos concedidos y solicitados en gran parte del departamento... ¿a nombre de quién aparecen, lugar, recursos y obligaciones, entre otros? Y otras más específicas: ¿a qué se debe que los alcaldes de la zona, con la excepción de Montelíbano, concejos municipales y grupos políticos no estén interesados en coordinar acciones para velar por los recursos naturales?; ¿por qué razones no han creado en la zona o el departamento una secretaría minera zonal o departamental que se haga cargo del conocimiento y manejo de estos recursos?; ¿por qué la CVS no le ha prestado la suficiente atención al San Jorge como lo ha hecho con la cuenca del río Sinú?. Para no olvidar están los casos de la gran emergencia ocasionada por la avalancha de lodo sucedida en la parte alta del río San Jorge en marzo de 1997 que afectó numerosas poblaciones ribereñas de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar; la desaparición de las grandes subiendas de peces del San Jorge que dejó en el olvido a poblaciones como Marralú y Segebe, entre muchas más y desde hace años el silencio ante los efectos producidos por la explotación minera. Algo más: ¿cuál es su opinión sobre la licencia de construcción de la termoeléctrica otorgada a Gecelca por la Secretaría de Infraestructura de Puerto Libertador?; ¿qué sucede que no asesora o apoya a los alcaldes de la zona para que hagan presencia por derecho propio en las reuniones de negociación que definen la suerte de nuestros recursos naturales?

En el mundo y en Colombia son bien conocidos los efectos de la explotación de minas de carbón a cielo abierto. Alguien debe informar y tomar medidas por los efectos producidos por estas minas, aún más si tenemos en cuenta los estudios realizados por la Universidad del Sinú que confirman que “existe suficiente evidencia para demostrar que las actividades de minería de carbón realizadas en Puerto Libertador liberan al medio sustancias capaces de generar daño en el material genético de las poblaciones humanas y animales en su cercanía, es decir, se encuentran en riesgo más elevado de padecer o desarrollar diferentes tipos de cáncer comparados con poblaciones no expuestas”. ¿Quién conoce la licencia ambiental concedida a Gecelca y vigila su cumplimiento estricto?, entre otras razones por la cercanía del río San Jorge y algunas poblaciones.

Córdoba es paso obligado en la interconexión eléctrica Colombia-Panamá, unirá la subestación Cerro Matoso con su similar Panamá II y dentro de lo proyectado por el gobierno nacional aparecen carreteras y la construcción de una línea férrea que unirá a Barrancabermeja con Cupica en el Pacífico, pasando por el sur de Córdoba. Los cambios siguen sucediendo de manera acelerada en el departamento, en especial en los municipios del sur y no contamos con un plan para hacerle frente con éxito para bien de la mayoría de la población. El uso y tenencia de tierra, las transformaciones que están sucediendo en las áreas

urbanas y rurales de Puerto Libertador, ya conocemos lo sucedido en Montelíbano con Cerro Matoso y Tierralta con la hidroeléctrica de Urrá, las actividades económicas, la producción, el empleo, la seguridad, el aumento de población, el reordenamiento de las veredas y corregimientos y en medio de este torbellino el conflicto con sus actores armados ilegales, las víctimas de todo tipo, las administraciones locales débiles y expuestas a intereses opuestos al bien público, la legalidad y la ética. Por todo esto me pregunto ¿cuál es el Plan que ayudará a resolver los graves y viejos problemas del sur de Córdoba?